

b) Ocho vocales designados por el Pleno, tres entre los representantes de las Iglesias, Confesiones y Comunidades Religiosas o Federaciones de las mismas, tres entre las personas de reconocida competencia, y dos entre los representantes de la Administración General del Estado.

c) Actuará como Secretario el del Pleno, que asistirá a las reuniones con voz pero sin voto.

4. El Ministro de Justicia podrá encomendar al Pleno o a la Comisión Permanente el estudio, informe y propuesta de los asuntos que considere de carácter urgente, así como presidir las sesiones de ambos órganos cuando así lo requiera la especial trascendencia de las cuestiones a tratar.

5. Podrán ser convocadas a las reuniones del Pleno o de la Comisión Permanente, y asistirán a las mismas con voz pero sin voto, aquellas personas que, a juicio del Presidente, puedan aportar información relevante sobre un asunto preciso.

Disposición adicional única. *Gastos de funcionamiento.*

El Ministerio de Justicia atenderá con cargo a los créditos asignados en sus presupuestos los gastos derivados del funcionamiento de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, de conformidad con las disposiciones vigentes en materia de indemnizaciones por razón del servicio.

Disposición transitoria única. *Vigencia de las normas de desarrollo.*

Permanecerá vigente la Orden del Ministerio de Justicia de 31 de octubre de 1983 sobre organización y competencias de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa en todo aquello que no se oponga al presente Real Decreto, hasta que sean dictadas las disposiciones precisas para el desarrollo del mismo conforme a la autorización contenida en su disposición final.

Disposición derogatoria única. *Derogación normativa.*

Queda derogado el Real Decreto 1890/1981, de 19 de junio, sobre constitución de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa en el Ministerio de Justicia, así como cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Real Decreto.

Disposición final primera. *Normas supletorias.*

En lo no previsto en el presente Real Decreto y en sus normas de desarrollo, la Comisión Asesora de Libertad Religiosa se regirá por lo dispuesto en el capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Disposición final segunda. *Habilitación normativa.*

Se autoriza al Ministro de Justicia para dictar las disposiciones precisas para el desarrollo del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 26 de octubre de 2001.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
ÁNGEL ACEBES PANIAGUA

MINISTERIO DE HACIENDA

20092 *RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2001, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se corrige error en la de 17 de octubre de 2001, por la que se aprueban las normas que rigen los concursos de pronósticos de Lotería Primitiva y sus modalidades.*

Detectado error en la transcripción en el «Boletín Oficial del Estado» de la Resolución de Loterías y Apuestas del Estado, de fecha 17 de octubre de 2001, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 254, de 23 de octubre de 2001, por la que se aprueban las normas que rigen los concursos de pronósticos de Lotería Primitiva y sus modalidades.

Página 38807. Apartado segundo. 4. Norma 55.^a, donde dice: «el precio por apuesta y sorteo es de 75 pesetas por lo que deberá abonarse un mínimo de 75, 225 ó 300 pesetas por cada apuesta,...», debe decir: «el precio por apuesta y sorteo es 75 pesetas por lo que deberá abonarse un mínimo de 150, 225 ó 300 pesetas por cada apuesta,...».

Madrid, 26 de octubre de 2001.—El Director general, Luis Perezagua Clamagirand.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

20093 *REAL DECRETO 1162/2001, de 26 de octubre, por el que se modifica el artículo 29 del Reglamento de asistencia jurídica gratuita.*

Con la entrada en vigor de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, y en virtud de lo previsto en su disposición adicional trigésima, que modifica el artículo 38 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, se regula un nuevo sistema de subvenciones para compensar a los Consejos Generales y Colegios Profesionales de Abogados y Procuradores el coste que genera el funcionamiento operativo de los servicios de asistencia jurídica gratuita, de las unidades encargadas del asesoramiento y la orientación previos al proceso a los ciudadanos y de la calificación provisional de las peticiones solicitadas.

Por ello, dando cumplimiento a la citada disposición adicional, se aprueba el presente Real Decreto, por el que se modifica el artículo 29 del Reglamento de asistencia jurídica gratuita, aprobado por el Real Decreto 2103/1996, de 20 de septiembre, a través del cual se posibilita un servicio al ciudadano que carece de los medios económicos necesarios para litigar, aunque ello suponga para las organizaciones profesionales indicadas asumir una carga de gestión administrativa. Esta actuación está subvencionada actualmente con un límite del 8 por 100 del crédito total consignado en el presupuesto de cada ejercicio, destinado a indemnizar a los abogados y procuradores por su participación en el turno de oficio y asistencia letrada al detenido. Esto supone un déficit para los Consejos Generales y Colegios Profesionales de Abogados y Procuradores, ya que esas cantidades no cubren en su totalidad los costes reales de funcio-

namiento de los servicios destinados a la asistencia jurídica gratuita (Servicio de Orientación Jurídica).

Es interés de este Gobierno, en la medida en que las disponibilidades presupuestarias lo permitan, establecer un sistema de subvención que compense a esas organizaciones por los costes reales que les pueda suponer el mantenimiento de esos servicios de asistencia jurídica gratuita. El medio más idóneo para conseguirlo es fijar unos módulos compensatorios para determinar la subvención que recibirá cada organización profesional, teniendo en cuenta los expedientes que hayan sido tramitados ante las correspondientes Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, cuya verificación realiza regularmente el Ministerio de Justicia.

Al mismo tiempo se establece el necesario sistema de justificación que las organizaciones profesionales tienen que cumplir para percibir la subvención.

Este Real Decreto ha sido informado por el Consejo General del Poder Judicial y por los Consejos Generales de la Abogacía Española y de los Colegios de Procuradores de los Tribunales de España.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Justicia y de Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de octubre de 2001,

DISPONGO:

Artículo único. *Modificación del artículo 29 del Real Decreto 2103/1996, de 20 de septiembre.*

El artículo 29 del Reglamento de asistencia jurídica gratuita, aprobado por el Real Decreto 2103/1996, de 20 de septiembre, quedará redactado del siguiente modo:

«Artículo 29. *Gastos de funcionamiento e infraestructura.*

1. El coste que genera a los Colegios Profesionales de Abogados y Procuradores el funcionamiento operativo de los servicios de asistencia jurídica gratuita, de las unidades encargadas del asesoramiento y la orientación previos al proceso a los ciudadanos y de la calificación provisional de las pretensiones solicitadas, se compensará en función de la aplicación a cada expediente del siguiente módulo:

a) Colegios de Abogados: 5.000 pesetas por expediente tramitado (30,050605 euros).

b) Colegios de Procuradores: 500 pesetas por expediente tramitado (3,005061 euros).

2. La cantidad resultante de multiplicar el módulo por cada expediente se devengará cuando quede constancia de que el mismo está completo y ha sido enviado a la correspondiente Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita para su resolución definitiva.

3. Dentro del mes natural siguiente al de finalización de cada trimestre, los Consejos Generales de la Abogacía Española y de los Procuradores de los Tribunales de España, así como las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, remitirán, por separado, al Ministerio de Justicia una certificación que contenga el número de expedientes completos tramitados por cada Colegio de Abogados y Procuradores que han tenido entrada en las respectivas Comisiones. En función de dichas certificaciones, el Ministerio de Justicia efectuará reglamentariamente los libramientos trimestrales que correspondan con cargo a sus dotaciones presupuestarias.

4. Para subvencionar el coste que genere al Consejo General de la Abogacía Española y al Consejo General de los Colegios de Procuradores de los Tribunales de España sus actuaciones en materia de asistencia jurídica gratuita, trimestralmente los Consejos percibirán una cantidad igual a la resultante de aplicar el 11,5 por 100 al importe que corresponda a los Colegios por los expedientes tramitados, según lo dispuesto en los apartados 1 y 2 de este artículo.»

Disposición adicional primera. *Efectividad de las medidas.*

Lo dispuesto en este Real Decreto será de aplicación a las certificaciones que se presenten a partir del 1 de abril de 2001.

Disposición adicional segunda. *Actualización de las cuantías.*

Las cuantías recogidas en el apartado 1 del artículo 29 del Reglamento de asistencia jurídica gratuita podrán ser actualizadas por el Ministro de Justicia, en función de las dotaciones presupuestarias y de la evolución de los costes, previo informe del Consejo General de la Abogacía Española, del Consejo General de los Colegios de Procuradores de los Tribunales de España y del Ministerio de Hacienda.

Disposición final única. *Entrada en vigor.*

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 26 de octubre de 2001.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia,
JUAN JOSÉ LUCAS GIMÉNEZ

20094 REAL DECRETO 1163/2001, de 26 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 391/1989, de 21 de abril, para regular los programas concretos de actuación en órganos judiciales.

Una Justicia ágil, moderna y eficaz es uno de los principales objetivos previstos en el Pacto de Estado para la reforma de la Administración de Justicia. Dicho documento, en su apartado cuatro, recoge el compromiso de aprobar un nuevo mapa judicial para redefinir la demarcación y planta judicial con arreglo a las cargas de trabajo existentes en cada uno de los órganos, así como al incremento de litigiosidad que se va produciendo cada año. En efecto, para prestar un adecuado servicio al ciudadano es preciso mejorar, ante todo, la capacidad de respuesta de Juzgados y Tribunales.

Las memorias del Consejo General del Poder Judicial ponen de manifiesto, de una parte, el incremento de la litigiosidad, que continúa creciendo año tras año, y, de otra, la existencia de importantes bolsas de asuntos pendientes. A la primera cuestión se hace frente con la creación de nuevas unidades judiciales. En los últimos cinco años se han creado un total de 627 nuevas unidades judiciales.

El problema radica en que su eficiencia se ve mermada por la existencia de importantes bolsas de asuntos pendientes, desde años atrás, en determinados órganos judiciales, lo que impide un adecuado funcionamiento